

Begirada

Iñigo Urkullu

LEHENDAKARI

“Solicito a Sánchez que reconsidere el uso obligatorio de la mascarilla”

Una entrevista de Míriam Vázquez
Fotografía de Jorge Muñoz

Iñigo Urkullu recibe a DEIA en plena escalada del virus entre los jóvenes. No descarta más medidas si se tensionan las UCI, pero pide civismo para que no haya reuniones en parques y playas por la noche

GASTEIZ — Ha pasado un año desde las elecciones y vuelven los rebrotes del virus. ¿Es la situación más dura y de mayor desgaste que ha vivido como lehendakari?

—Sí es un tiempo difícil de gestionar, pero no lo llevo al extremo del desgaste personal. Sí es el tiempo más duro que me ha correspondido como lehendakari por lo humano y por la incidencia colectiva de una pandemia pero, consciente de esta situación, intento adoptar las decisiones con el mayor sentido común posible. Intento hacerlo de manera equilibrada también en las consecuencias económicas.

Usted dijo hace unos días que no se esperaba que la tasa de contagios superase los 300 por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que ha fallado?

—Creo que nadie lo esperábamos ni en Euskadi ni en el Estado español, ni en la Unión Europea. Quizás lo que no conocíamos es la incidencia de esta variante Delta, con una velocidad de contagio superior a otros brotes o variantes anteriores. Pero, afortunadamente, también tenemos un contrapeso: quizás la menor incidencia en consecuencias sanitarias para quien se ve afectado por el contagio. De hecho, llevamos dos semanas sin fallecimientos por covid, y una atenuación en la ocupación de camas UCI aun cuando no es motivo de relajación. Cada variante afecta de una

manera. ¿Qué es lo que ha fallado también? Algunos planteamos la conveniencia de prórroga del estado de alarma para intentar evitar determinados comportamientos que iban a venir asociados ineludiblemente al levantamiento del estado de alarma, con una mayor interacción social sin guardar las medidas preventivas.

¿La decisión de Pedro Sánchez de levantar el estado de alarma ha abocado a esta situación y ha puesto a Euskadi a los pies de los caballos?

—No solamente a Euskadi. Son otras comunidades autónomas también las que están solicitando, por ejemplo, toques de queda y cierres perimetrales. Es algo que afecta al conjunto del Estado español. No es que la decisión del presidente español haya abocado a esto, porque hemos de partir de una premisa inicial: el cumplimiento de las medidas desde uno mismo y de manera solidaria. ¿Esto se podría haber evitado con la prórroga del estado de alarma? No lo sé. Si aun con estado de alarma el comportamiento individual y colectivo no cayera en cuenta del riesgo, es otra cuestión.

¿Usted ha sondeado a otras comunidades que también han visto tum-

“Si la situación se tuerce, habrá que poner medidas; no sé si tiene que ser un estado de alarma, pero sí un paraguas para el Estado”

“En la gestión del virus no vamos a recurrir a la vía judicial para una cuestión que es de sentido común y de voluntad política”

bado el toque de queda desde los tribunales para volver a pedir a Sánchez el estado de alarma? ¿O ha pasado página ya con este asunto?

—No las he sondeado. En Euskadi no estuvimos de acuerdo con la implantación del estado de alarma en marzo del año pasado como se hizo. Sigo creyendo que había posibilidades de desarrollar una legislación ordinaria en materia de sanidad que pudiera darnos amparo. No se hizo. He sido yo quien ha solicitado por escrito en abril la prórroga del estado de alarma al presidente del Gobierno español, que lo derivó a las decisiones del Consejo Interterritorial de Sanidad e invitó a que recurriéramos a las vías judiciales. Yo dije que no iba a judicializar esta cuestión. ¿Que pueda ser necesario otro estado de alarma? No lo sé, habría que valorar la incidencia que esta variante Delta tiene en otros indicadores. Pero a mí no me dolerían prendas si hubiera que hacerlo. Lo que nos da cierta esperanza de manera muy prudente es la ocupación de camas UCI, no fallecimientos, el índice de reproductividad... Pero si viéramos que se tuerce, habrá que poner sobre la mesa alguna otra medida que no sé si tiene que ser con el estado de alarma pero, en todo caso, que sea un paraguas para el conjunto del Estado. Otras comunidades sí insisten a los tribunales con el toque de queda, y otras recortan el horario de los bares. ¿Puede parecer que el Gobierno vasco no está agotando todas las vías en su mano?

—No, al contrario. No es cierto que no tengamos una limitación de horarios en establecimientos hosteleros: tenemos hasta las 2.00 de la madrugada. No es cierto que no hayamos arbitrado nada en el ocio nocturno: hemos

asemejado los grupos 1 y 2 a los establecimientos hosteleros hasta las 2.00. Quizás otras comunidades han adoptado decisiones cuando su horario era mucho más flexible que el que existía en Euskadi. Es ingente el trabajo de adecuación a la situación al que en todo momento están procediendo el Departamento de Salud y Osakidetza. **Ha dicho que, si se desboca la situación en las UCI, no descarta adoptar más medidas. ¿Pueden estar relacionadas con la hostelería o el toque de queda por municipios?**

—Yo no miraría a un sector determinado, a la hostelería. Siempre partiré del nivel de compromiso individual y colectivo. Hay que cumplir las medidas preventivas: higiene personal, lavado de manos, uso de mascarilla y distancia en la interacción social.

¿Puede concretar una medida?

—El año pasado, planteé el toque de queda, pero me he visto sometido a recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con una sala de lo contencioso-administrativo que ha dictado un auto ante el límite de cierre de horarios de establecimientos hosteleros que dejaba sin valor la decisión que habíamos adoptado. Después de la negativa del presidente español a la prórroga del estado de alarma y cuando se nos invitaba a una judicialización, dije que no íbamos a recurrir a la vía judicial para una cuestión que es de sentido común y de voluntad política. En el toque de queda, tribunales superiores de diversas comunidades han fallado una cosa y la contraria. Se necesita una visión de conjunto, y herramientas que puedan servir de paraguas.

¿Pedro Sánchez debe tener una posición más proactiva?

—Entiendo que sí. No es bueno, si es el caso, interpretar como riesgo ofrecer herramientas para el conjunto del Estado mediante una ratificación en el Congreso de los Diputados porque pudiera llevarle a perder la votación. La disposición, por lo menos mía, y creo hablar en nombre de todos los presidentes de comunidades autónomas, es de colaboración para que puedan ser similares en todos los lugares las medidas básicas, y luego cada una de las comunidades tendremos nuestras realidades y capacidades en función de nuestras competencias para adoptar medidas complementarias. La situación invita a una reflexión sobre si son necesarias herramientas paraguas para el conjunto del Estado, entendiendo la época del año en que estamos, que pueda haber una afectación a determinados sectores económicos, como puedan ser el turismo y la hostelería.

¿A qué se refiere?

—Si fuera incluso que el paraguas fuera solo el uso de la mascarilla de manera obligatoria nuevamente, yo sí he venido a solicitar el uso de la mascarilla de manera obligatoria. Ha sido un real decreto ley del Gobierno español el que ha eximido del uso de la mascarilla en determinados lugares. Ese decreto tiene que ser convalidado el miércoles en el Congreso de





los Diputados. Es una buena ocasión para que el Gobierno español reconsidere esta cuestión, aun cuando sea única y exclusivamente la relativa al uso obligatorio de la mascarilla.

¿Es la petición que le hace a Sánchez, que reconsidere su uso?

—Sí, he venido demandando el uso de la mascarilla hasta que la población esté vacunada globalmente.

El Gobierno vasco recomienda que no haya reuniones en los parques de noche, y no se trata de vallar esos espacios, sino de realizar una comunicación desde los ayuntamientos.

¿No va a haber vigilancia policial ni multas y es una recomendación?

—No, no tiene nada que ver una cosa con otra. El decreto dice “se determina” evitar las aglomeraciones, no “se prohíbe”. Apelamos al compromiso cívico, cuando no tenemos capacidad para prohibir salvo el consumo de alcohol en la calle o las aglomeraciones sin cumplimiento de medidas preventivas. En algunos casos, los titulares de los espacios son los ayuntamientos, pero no siempre. Puede haber pueblos con puertos, y la competencia no es de los ayuntamientos. Ahora, esos espacios están en los pueblos, y no decimos que son los encargados del control. Sí estamos pidiendo que hagan un ordenamiento: la señalización de los lugares donde tiene que haber un límite horario desde las 0.00 a las 6.00 para evitar las aglomeraciones excesivas sin cumplimiento de las medidas preventivas. El control en su caso será una labor conjunta de la Ertzaintza con la Policía local, pero no todas tienen Policía municipal y quizás los horarios de prestación de servicio limitan el control. Somos muy conscientes. Y nadie está planteando el vallado. Ya el año pasado los alcaldes de las capitales que forman parte del LABI decían que no todos los parques tienen llave.

¿Se ha encontrado con una posición de resistencia en los algunos alcaldes, como en Gipuzkoa?

—No, en absoluto. Asumo la responsabilidad si tiene que ser unipersonal, pero las decisiones se adoptan en un consejo asesor del LABI tras un dictamen de la comisión científica técnica. En el consejo asesor participan los tres alcaldes de las capitales, y uno preside la asociación de municipios vascos. En el consejo no me he encontrado con ninguna resistencia.

¿Le va a hacer un roto económico la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el confinamiento, a la hora de devolver multas?

—No, lo que hemos paralizado es la tramitación, pero no creo que nos vaya a hacer un roto. Es una cuestión que no solo afecta al Gobierno vasco, sino al conjunto del Estado. Es una sentencia que habrá que analizar en conjunto con el Gobierno español.

No se conoce al detalle la sentencia.

—No, y no sé si cabe otra acción por parte del Gobierno español. Lo que es triste es que se haya llegado a judicializar cualquier acción institucional que pretenda preservar la salud, que haya formaciones que recurran al TC, y el TC entre en el juego con una interpretación por su correspondencia con determinadas formaciones. ●

“De la Conferencia de Presidentes no sé nada; y aviso de que tengo mi agenda”

GASTEIZ — En Euskadi, Vox judicializa leyes como la Ley Municipal por el uso del euskera. ¿Le preocupa que pueda caer, por los pronunciamientos previos del Tribunal Superior de Justicia vasco?

—Lo que no tiene Vox como representación política lo utiliza por la representación que tiene en el Congreso. También en la ley contra la pandemia. De ahí la exigencia de un sistema de garantías en el autogobierno, una relación bilateral con la metodología del Concierto, que una decisión no pueda ser modificada unilateralmente. Lo planteo para la defensa del Estatuto por la pretensión recentralizadora de los gobiernos españoles o la estrategia de las formaciones con ideología uniformizadora.

En relación al diálogo con Pedro Sánchez, ¿el balance de este año ha sido decepcionante?

—(Silencio) Yo no quiero ser crítico, entendiendo las circunstancias del Estado y las prioridades que se pueden haber fijado. Debe ser consciente del modelo de Estado, que él mismo reconoce como Estado plurinacional y compuesto, y que la singularidad tiene que tener un ejercicio de relación interinstitucional diferente al actual de manera bilateral y que, además, en nuestro caso hay un compromiso con un cronograma para el cumplimiento del Estatuto de Gernika. De momento, esto no se está desarrollando como debería ser.

En el Ingreso Mínimo Vital, hay un bloqueo importante y se mantiene al ministro Escrivá en el cargo. ¿Sánchez no está siendo diligente con esta transferencia?

—Es solamente una cuestión de voluntad política por parte del ministro Escrivá porque hay un compromiso político de transferencia íntegra del IMV que debería haber sido en octubre del año pasado. En el Gobierno de PNV y PSE no se pone en cuestión. Todos estamos a una. El presidente debe ser consciente de que es una cuestión clave en su estabilidad institucional, un acuerdo con una formación que le da estabilidad.

¿El problema es Sánchez, como le dice prácticamente en todos los plenos Carlos Iturzaiz (PP)?

—El problema lo tiene el PP. En los plenos de control, utiliza el debate con el lehendakari para profundizar en la política de oposición al Gobierno español. Es intentar actuar contra el Gobierno español

dando la patada en el trasero al lehendakari.

¿Va a estar el lehendakari en la Conferencia de Presidentes autonómicos de Sánchez este mes?

—Desconozco que vaya a haber Conferencia de Presidentes. Solo sé lo que anunció el 16 de junio. Ha transcurrido un mes. Desconozco que vaya a haberla, para qué, cuándo y cómo. No conozco nada. Lo que sí advierto es que el lehendakari tiene su propia agenda.

Hay un paralelismo con el año pasado. Se convocó una conferencia, pero usted pedía antes la Comisión del Concierto para abordar los límites de gasto.

—Efectivamente, he reclamado al presidente español la reunión de la Comisión del Concierto que debió ser en junio para concertar tributos. No hay respuesta. Por tanto, analizaré con mesura y con toda la gravedad que requiera la situación. Pero insisto, son maneras de hacer las cosas que tienen

“Sánchez debe ser consciente de que el traspaso del IMV es una cuestión clave en su estabilidad institucional”

“El PP en el Parlamento Vasco intenta actuar contra el Gobierno español dando la patada en el trasero del lehendakari”

que estar basadas en un respeto. Transcurrido un mes, desconozco la pretensión de la conferencia. Antes de eso, hay una necesidad de que el presidente español interprete los compromisos adquiridos en orden a esa bilateralidad.

¿Condiciona su presencia a que primero haya Comisión Mixta?

—No puedo condicionar mi presencia a algo que desconozco. Pero sí digo que tengo mi agenda. **¿Cuándo fue la última vez que hablaron Sánchez y usted?**

—Fue una respuesta de acuse de recibo hace 15 o 10 días a un escrito que le había enviado en reivindicación del cumplimiento del cronograma de transferencias y la necesidad de reunir la Comisión de Concierto. Hablamos personalmente en la inauguración del Centro Memorial. — M. Vázquez

“Nos ponemos a disposición del Parlamento, pero creo que corresponde a los grupos debatir sobre el nuevo estatus”

“Escuché las explicaciones del consejero Arriola sobre las adjudicaciones en Euskal Trenbide Sarea y son absolutamente lógicas”

“La izquierda abertzale podría orientar a las personas privadas de libertad para que eviten actos que causen otra victimización”

“Ojalá que el Presupuesto de 2022 pueda ser todavía mayor que el actual, pero con la prevención de cumplir el déficit para 2023”



“Sería garantista un referéndum consultivo sobre el estatus antes de ir al Congreso”

Miriam Vázquez

GASTEIZ – En el nuevo estatus de autogobierno, ¿contempla como lehendakari asumir el liderazgo con una propuesta desde el Gobierno?

—Depositamos el ejercicio del acuerdo en los grupos parlamentarios. En 2017 emitimos un informe sobre la situación de incumplimiento del Estatuto, lo que nos solicitó el Parlamento y, a partir de ahí, nuestra disposición es absoluta, pero creo que corresponde a los grupos debatir.

¿Qué quiso decir el jueves cuando aseguró que la ley se tiene que adaptar a la voluntad popular? ¿Habla del derecho a decidir, de una consulta?

—Estoy hablando de lo que tanto el ordenamiento jurídico en el Estado como la propia Constitución permiten; los referéndums consultivos. Hay que identificar claramente que un referéndum consultivo en Euskadi antes de ir al Congreso de los Diputados sería sobre el acuerdo alcanzado en el Parlamento Vasco. Estoy planteando que el acuerdo alcanzado en el Parlamento Vasco sobre un nuevo estatus sea el acuerdo más amplio posible, con participación de diferentes tradiciones políticas. Es una base muy garantista que un acuerdo amplio en el Parlamento Vasco sea sometido a un referéndum consultivo

en la sociedad vasca antes de llegar al Congreso de los Diputados.

¿Puede ser válido para Catalunya?

—Sí. Sin adentrarme en otros vericuetos que corresponden a los partidos políticos catalanes, desde la aprobación del Estatut y el recurso del PP al Estatut ya cepillado en el Congreso de los Diputados, podría ser una base el planteamiento de un referéndum consultivo sobre un acuerdo de una institución soberana, como es un Parlamento autonómico, sea el catalán o el vasco, que tenemos nuestras competencias legislativas, y dentro del respeto al ordenamiento jurídico. Una base para que aquello que no fue en su momento respetado por el Congreso ni siquiera con un referéndum, en este caso pudiera serlo.

¿Ha hablado con el president Aragonès?

—No he tenido ocasión aunque hemos coincidido en conferencias telemáticas. La disposición mutua es reunirse en cualquier momento.

¿Es realista plantear la negociación sobre un referéndum catalán de independencia o habrá que reconducirla hacia el autogobierno?

—Existe una mesa bilateral entre el Gobierno español y el Govern. En ese ejercicio de diálogo, que es absolutamente imprescindible y necesario, veremos qué es lo que sale. No planteo qué tiene que ser para Catalunya.

Han alcanzado un acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU sobre la Ley Antipandemia. ¿Ha estado su Gobierno dispuesto a ceder más con Podemos que con Bildu y PP?

—No, en absoluto. La disposición ha sido similar. Y en las reuniones que he mantenido con los portavoces, he ofrecido los temas en los que podríamos alcanzar acuerdos. He recibido una respuesta por parte de Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, y veremos a lo largo de la legislatura en qué ámbitos nos podemos encontrar con los dos. Vamos a profundizar en la legislatura en un posible entendimiento. **Las Cuentas de 2021 han superado los 12.000 millones, y dice Azpiazu que en 2022 habrá una inversión sin precedentes. ¿Hasta qué punto?**

—En este ejercicio y el anterior estamos liberados del cumplimiento del objetivo del déficit por acuerdo en las instituciones europeas, pero en 2023 vendrá la necesidad de cumplir. El ejercicio próximo será inversor, profundizando en las políticas sociales. Coincido con el consejero; ojalá pueda ser un Presupuesto mayor todavía que el de 2021, pero con la prevención de la mirada a 2023 con el objetivo de déficit y el endeudamiento.

La OCDE ha fijado un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. ¿Es el momento de abrir el melón fiscal en Euskadi?

—Este año 2021 deberemos abordar, primero, la reflexión. No quiero adelantar acontecimientos.

Arriola ha dado explicaciones en el Consejo de Gobierno sobre las adjudicaciones de Euskal Trenbide Sarea. ¿Mantiene la confianza en él?

—Sí, si no, tendría que haber adoptado otra decisión. Este tipo de denuncias quizás obedecen a un juego político e inciden en primero denunciar y después preguntar. Escuchamos las explicaciones y son absolutamente lógicas. Es una explicación sobre los metadatos, mensajes que están sustentados en comunicaciones previas y que arrastran identidades de comunicaciones de hace muchos años.

Cuando gestionen Prisiones, ¿cabe esperar la libertad inmediata de los mayores de 70 años y enfermos?

—Yo no puedo adelantar nada. Se busca una resocialización, pero también desde el trabajo en los centros.

Entre los presos de ETA está ‘Anbotto’. ¿Contempla una ‘Via Nancrales’ para impulsar la autocritica?

—Las personas privadas de libertad saben cuáles son las vías de reinserción y progresión de grados. Hay personas en ETA que han optado por una comunicación, y otras no.

Como pide la AVT, ¿hay margen para hacer ver que no cabe un ‘ongietorri’ al salir en semilibertad?

—No tenemos competencia para

impedir. Apelamos a una cuestión de humanidad, evitar una nueva victimización de las personas que han sufrido atentados, y evitar actos de enaltecimiento del terrorismo cuando ETA no existe. La izquierda abertzale es consciente y pudiera orientar a las personas privadas de libertad para que tuvieran otro tipo de actitudes.

¿Hay un rebrote de odio por las agresiones a algunos cargos del PP o la campaña contra la Ertzaintza?

—Nos preocupa, aunque pueda ser muy minoritario. Provoca una tensión en la izquierda abertzale que quizás no deja avanzar en el reconocimiento del daño injusto causado. Me preocupa que pueda dejar un poso para generaciones posteriores.

El Gobierno español va a abrir el concurso sobre el coche eléctrico y hay 4.300 millones de los fondos europeos en juego. ¿A cuántos cree que debería optar Euskadi?

—Euskadi Next plantea una estimación de unos 6.000 millones en todos los planes. Todavía está por ver.

¿Interpreta la firma del soterramiento de las vías en Zorrotza como la antesala de que el TAV se va a tratar de otra manera?

—Ojalá fuera así y sea una señal para un cambio de actitud en el Ministerio. Desde las instituciones europeas se reclama mayor diligencia. ●